



RADICADO NO.: 202504011006864001

BOGOTÁ 12 diciembre 2025.

RESPETADO SENADOR  
FABIÁN DÍAZ PLATA  
SENADOR DE LA REPÚBLICA  
SENADO DE LA REPÚBLICA

BOGOTÁ D.C.

**Asunto: ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOBRE EL PROYECTO DE LEY NO. 194 DE 2025 (SENADO) “POR LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA PARA PROTEGER DE MANERA ESPECIAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, COMBATIR LA MALNUTRICIÓN Y PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.”**

Respetado Senador,

La Defensoría del Pueblo presenta sus comentarios al Proyecto de Ley No. 194 de 2025 (Senado) el cual, sin duda, fortalece las medidas de política pública orientadas a garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada. La aprobación del mismo constituye un avance hacia una ética del consumo responsable y del derecho a entornos saludables como pilares de la protección integral de la niñez colombiana.

La evidencia epidemiológica y de salud pública muestra que el consumo de productos ultraprocesados genera un impacto negativo desproporcionado en la salud y bienestar de niñas, niños y adolescentes. Constituyendo un factor directamente asociado con la epidemia global de desnutrición infantil y juvenil, y con el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles a lo largo de la vida de los individuos.

Para la Defensoría del Pueblo es además de suma importancia que se consolide un marco normativo para garantizar la alimentación sana de niñas, niños y adolescentes, toda vez que el derecho al buen futuro de estas generaciones pasa necesariamente por el consumo de alimentos que no sean riesgosos para su salud y bienestar. Debe señalarse a este respecto que el Plan Estratégico Institucional “Defensoría del Pueblo y la Naturaleza #PorUnBuenFuturo”, impulsa el derecho emergente al Buen Futuro como un derecho fundamental autónomo, de naturaleza individual y colectiva.

En primer lugar, se presentará el marco normativo constitucional que rige el derecho humano a la alimentación y el mandato superior de protección de niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, se discutirá brevemente la evidencia científica sobre el impacto negativo que tiene el consumo de comestibles y bebidas ultraprocesados en la salud humana, en particular en la de niñas, niños y adolescentes. En tercer lugar, se abordará el deber de debida diligencia que

recae sobre las empresas y actores que intervengan en la comercialización de alimentos ultraprocesados.

En cuarto lugar, se abordarán las limitaciones que han sido definidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la jurisprudencia constitucional a la libertad de expresión. En quinto lugar, se expondrán los antecedentes sobre los entornos alimentarios saludables. En sexto y séptimo lugar, la Defensoría del Pueblo presentará el análisis concreto al Proyecto de Ley y a su articulado con recomendaciones de modificación orientadas a mejorar el contenido del proyecto de ley.

## 1. Marco normativo y jurisprudencial

El derecho a la alimentación adecuada y la protección contra el hambre son mandatos explícitos en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel internacional como nacional. Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC (ratificado por el Estado de Colombia mediante la Ley 74 de 1968). En complemento, la Observación General No. 12 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales precisa que este derecho se ejerce cuando toda persona tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla, concibiéndola de manera amplia y vinculada directamente a la dignidad inherente de la persona humana.

A nivel nacional, la protección de este derecho ha sido recientemente fortalecida. El Acto Legislativo 01 de 2025 reformó el artículo 65 de la Constitución Política para imponer la obligación estatal de garantizar, de forma progresiva, el Derecho a la Alimentación Adecuada, proteger contra el hambre y las distintas formas de malnutrición, y promover la seguridad, soberanía y autonomía alimentarias.

Adicionalmente, el Punto 1 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera sienta las bases para la Reforma Rural Integral, cuyo objetivo es asegurar el acceso suficiente, en cantidad, calidad y precio, a los alimentos necesarios para una buena nutrición de toda la población, con un énfasis particular en grupos vulnerables.

En el caso específico de la niñez y la adolescencia, el marco constitucional les otorga una protección prevalente. El artículo 44 de la Constitución Política consagra el derecho a la alimentación equilibrada como un derecho fundamental de los niños y niñas.

Este mandato es reforzado por la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada mediante la Ley 12 de 1991, que establece el deber de los Estados de combatir la malnutrición y de adoptar las medidas necesarias con el máximo de recursos disponibles para la efectividad de sus derechos sociales. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-028/2024, ratificó este enfoque al establecer que el interés superior del niño constituye un derecho sustantivo, una obligación intrínseca del Estado y un principio jurídico interpretativo fundamental.

Finalmente, la jurisprudencia constitucional, mediante sentencia T-291/2022, ha resaltado la importancia de la alimentación escolar como un componente fundamental del derecho a la educación. Esta garantía busca asegurar la permanencia en el sistema educativo en condiciones dignas, prevenir la deserción y contribuir al crecimiento y desarrollo físico y psicológico adecuado de los estudiantes, subrayando la necesidad de que los alimentos sean nutritivos y equilibrados.

## 2. El impacto en la salud y bienestar de los comestibles y bebidas ultraprocesados

Según un artículo de la revista científica *The Lancet*, la definición más aceptada sobre alimentos ultraprocesados es la de formulaciones de ingredientes que resultan de una serie de procesos industriales, los cuales usualmente tienen un contenido alto de azúcar, sal y grasas, son bajos en fibra, proteína y micronutrientes, y además contienen aditivos, emulsificantes, estabilizadores, colorantes y endulzantes artificiales, lo cual empobrece notablemente su perfil nutritivo (The Lancet, 2025). Según la clasificación Nova, los alimentos ultraprocesados son productos fabricados a través de procesos químicos, biológicos y físicos que requieren múltiples aditivos para su elaboración, y en los cuales los alimentos nutritivos tienen una presencia mínima o están totalmente ausentes (De Amicis, R., Mambrini, S.P., Pellizzari, M. et al, 2022).

Los productos comestibles y bebibles ultraprocesados están directamente relacionados con malos resultados en salud tales como obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, y ciertos tipos de cáncer.

Así mismo, investigaciones recientes muestran que el consumo de alimentos ultraprocesados también está vinculado con muertes prematuras entre las edades de 30 y 69 años. Un estudio mostró esa asociación basada en análisis de datos sobre dieta y fallecimientos en ocho países (Australia, Brasil, Canadá, Chile, México, Gran Bretaña, Estados Unidos y Colombia) ((Nilson et al., 2025). Dicho estudio mostró que un incremento del 10% en el consumo de calorías provenientes de ultraprocesados incrementaba en un 3% el riesgo de mortalidad general.

En países con los niveles más altos de consumo de ultraprocesados (Estados Unidos y Gran Bretaña), donde este tipo de alimentos equivale al 55% del consumo total de calorías de los individuos, se estima que la dieta basada en ultraprocesados es responsable del 14% de muertes prematuras en 2018 (18.000 fallecimientos en Gran Bretaña y 124.000 en los Estados Unidos). En contraste, en Colombia, un país donde el consumo de ultraprocesados representa el 15% del total de la ingesta de calorías por individuo, el consumo de estos alimentos y bebidas causa un 4% de las muertes prematuras (3.000 fallecimientos) (Ibid).

Sin embargo, la brecha entre países desarrollados, donde la ingesta de ultraprocesados ha sido históricamente mucho más alta que en los países en vías de desarrollo, se está cerrando gradualmente. Como lo muestra el artículo de The Lancet, el consumo de alimentos ultraprocesados es una gran amenaza de salud pública tanto en países de ingreso alto como en los de ingreso medio y bajo, lo cual ha llevado a que muchos estudios postulen la existencia de una

epidemia global de obesidad y diabetes tipo 2 directamente asociado con dietas ricas en ultraprocesados (The Lancet, 2025).

Como lo muestran muchos estudios, la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más apremiantes en el mundo (Sahoo et al., 2015) La prevalencia de la obesidad infantil y adolescente ha crecido dramáticamente en el mundo, pasando de 4% en 1975 a 18% en 2016. Por ejemplo, en los Estados Unidos el 19.3% de los niños y adolescentes son obesos (World Health Organization [WHO], 2021).

Ser obeso en la infancia y la adolescencia tiene resultados adversos para el derecho al buen futuro en la medida en que dichos niños y niñas, al crecer y hacerse adultos, tienen muchos más riesgos de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles y de tener expectativas de vida más cortas (Reilly y Kelly, 2011).

En el plazo inmediato, la obesidad infantil y juvenil conlleva serios problemas psicológicos, desórdenes alimentarios, asma, y afecciones musculoesqueléticas en niños y niñas. Así mismo, los niños y niñas con obesidad tienen más riesgos metabólicos por causa de condiciones como dislipemia, diabetes mellitus tipo 2 o patologías cardiovasculares. Si la obesidad persiste, esta condición puede llevar en la adultez a enfermedades crónicas que pueden acortar significativamente la expectativa de vida (Quek et al., 2017).

Debido a que existe evidencia cada vez más consistente que muestra que el consumo de alimentos ultraprocesados durante la infancia aumenta el riesgo de sufrir obesidad en el corto plazo, y de tener enfermedades crónicas en la adultez que conducen a expectativas de vida más bajas, los Estados a nivel mundial han implementado un conjunto de estrategias de política pública orientadas a desincentivar la ingesta de este tipo de productos.

Como lo muestra el artículo citado de *The Lancet*, la aproximación más efectiva para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados se ha dado a través de impuestos a bebidas y comestibles ultra-endulzados, lo cual ha resultado en reducciones significativas en la compra de tales productos. Sin embargo, la imposición de impuestos sin que se ofrezcan subsidios paralelos para alimentos sanos, orientados a poblaciones que viven con inseguridad alimentaria, no conlleva a beneficios generales y perdurables.

Por otra parte, la evidencia de política pública muestra que, junto con la imposición de impuestos sobre alimentos ultraprocesados, es indispensable que existan medidas orientadas a desincentivar el consumo de estos productos por medio de etiquetamientos frontales que alerten al consumidor sobre la presencia de componentes ultraprocesados.

La evidencia muestra que para reducir significativamente el consumo de ultraprocesados es necesario que el Congreso y el Gobierno diseñen e implementen políticas agresivas para desestimular el consumo de ultraprocesados en entornos escolares y prohibir la comercialización, promoción y propaganda de alimentos ultraprocesados dirigidos a niñas, niños y adolescentes (The Lancet, 2025).

El proyecto de Ley objeto de este análisis se enmarca en las propuestas de política pública que a nivel internacional buscan desincentivar el consumo de bebidas y alimentos ultraprocesados entre niños, niñas y adolescentes. El propósito principal de este tipo de iniciativas legislativas es reducir el impacto negativo de los alimentos ultraprocesados en la salud y el bienestar de los niños y niñas que existen actualmente, así como en las futuras generaciones de menores y adultos cuya calidad y expectativa de vida se podrá ver directamente afectada por el consumo de ultraprocesados en su niñez y adolescencia.

### 3. Deber de debida diligencia de las empresas

No puede perderse de vista el **deber de debida diligencia que recae en las empresas frente a estos escenarios**. Al respecto, vale la pena recordar que, como consecuencia de las alertas sobre las afectaciones a los derechos humanos producto de la actividad empresarial, en 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los *“Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”*.

Estos principios están contruidos bajo tres pilares: (i) el deber del Estado de proteger los derechos humanos, (ii) la responsabilidad de las empresas de respetarlos y (iii) la necesidad de garantizar mecanismos de remediación.

En particular, el **Principio 17** se refiere a la debida diligencia en materia de derechos humanos. De conformidad con este principio, las empresas deben proceder con debida diligencia en materia de derechos humanos, a fin de **identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas de sus actividades**. De acuerdo con el Consejo de Derechos Humanos, esto incluye una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto (el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas).

La jurisprudencia constitucional se ha pronunciado respecto a la debida diligencia empresarial en el país, resaltando que *“las actividades empresariales no pueden estar desconectadas de la eficiente protección de derechos humanos”* (Corte Constitucional, Sentencia T-732 de 2016).

En este caso, **adquiere especial relevancia el deber de debida diligencia que recae sobre los distintos actores y empresas en la venta, publicidad, promoción y patrocinio de productos comestibles y bebibles ultraprocesados** frente al respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y, puntualmente, en la construcción de entornos saludables. Es imprescindible que todos los actores tomen acciones de prevención, mitigación y respuesta frente a escenarios que fomentan la vulneración de los derechos de la niñez.

En consecuencia, la Defensoría del Pueblo valora de manera positiva las obligaciones que el proyecto de ley asigna tanto al sector empresarial, al exigir mayores estándares de responsabilidad corporativa, como al Estado y a la sociedad en su conjunto, al reconocer su papel esencial en la construcción y garantía de entornos alimentarios saludables. La propuesta legislativa no solo avanza en la regulación de prácticas que afectan el bienestar de la niñez, sino



que promueve una corresponsabilidad efectiva entre actores públicos, privados y comunitarios para la protección del derecho a la alimentación.

#### 4. Limitaciones a la libertad de expresión

Sobre los límites a la publicidad de productos ultraprocesados, la Sentencia T-145 de 2019 precisó que, como cualquier otro derecho humano, **la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Por lo tanto, dicho derecho puede estar sujeto a limitaciones** por parte de cualquiera autoridad estatal o eventualmente de particulares, previamente adoptadas por el legislador bajo estrictas condiciones.

En la misma vía, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Observación General No. 34, precisó que de conformidad con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) **el ejercicio del derecho a la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales**. En consecuencia, es viable imponer dos tipos de restricciones: (i) de un lado, las que se refieren al respeto de los derechos o la reputación de otras personas; y (ii) de otro lado, las que se vinculen con la protección de la seguridad nacional y el orden público, o de la salud y la moral pública.

En el caso del Proyecto de Ley No. 194 de 2025, la Defensoría del Pueblo identifica que las limitaciones contempladas en el proyecto sobre publicidad y difusión de información relacionada con productos comestibles y bebibles ultraprocesados se ajustan a los criterios definidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas. En particular, la restricción se justifica en el respeto del derecho humano a la alimentación adecuada, la garantía de entornos alimentarios saludables y el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

#### 5. Antecedentes sobre entornos alimentarios saludables

La promoción de entornos alimentarios saludables ha sido objeto de desarrollo normativo en Colombia, buscando garantizar de manera efectiva el derecho a la salud y el derecho humano a la alimentación adecuada. El pilar de esta regulación es la Ley 2120 de 2021, la cual estableció la obligatoriedad del *etiquetado frontal de advertencia* para todos los productos comestibles o bebibles con cantidades excesivas de nutrientes críticos.

La reglamentación de esta Ley se consolidó mediante las Resoluciones 810 de 2021 y 2492 de 2022. Esta última modificó la normativa para armonizar los criterios técnicos con los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dicha modificación supuso la transición de un esquema meramente informativo a uno preventivo y disuasivo, adoptando un modelo de comunicación visual de riesgo y fortaleciendo la efectividad del sello de advertencia, lo que es esencial para garantizar el derecho a la información veraz y comprensible del consumidor.

La Defensoría del Pueblo subraya que la construcción de un entorno alimentario saludable —definido como el conjunto de espacios, condiciones y relaciones que determinan las posibilidades reales de acceder, elegir y consumir alimentos

nutritivos e inocuos— es esencial para la plena realización del derecho a la alimentación adecuada.

Desde un enfoque de derechos humanos, esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y cumplir este derecho, adoptando medidas normativas que regulen la producción, distribución y publicidad de alimentos. Un marco jurídico sólido es indispensable para promover la equidad y garantizar que toda la población, especialmente la niñez y adolescencia, pueda ejercer su derecho a una alimentación digna y saludable.

La urgencia de fortalecer estas medidas es patente debido a la persistencia de la inseguridad alimentaria en Colombia. De acuerdo con el DANE, la presencia de niños, niñas y adolescentes en los hogares aumenta la probabilidad de que estos experimenten inseguridad alimentaria moderada o grave (DANE, 2025).

Características del hogar	Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave	
	2023	2024
Sin menores de 5 años	24,8	24,3
Con al menos un menor de 5 años	32,8	31,5
Sin menores de 18 años	22,4	21,8
Con al menos un menor de 18 años	30,2	29,7
Sin adultos mayores	26,6	26,1
Con al menos un adulto mayor	25,1	24,4
Sin personas de 5 años o más con discapacidad	24,6	24,1
Con al menos una persona de 5 años o más con discapacidad	37,2	35,0

Fuente: elaboración propia con datos del DANE

Este panorama revela la persistencia de brechas estructurales y la necesidad imperiosa de fortalecer las medidas estatales de protección alimentaria dirigidas a esta población, cuya garantía constituye un elemento indispensable para el bienestar y el desarrollo pleno del país.

6. Análisis del articulado

La Defensoría del Pueblo destaca los avances que el Proyecto de Ley No. 194 de 2025, radicado el 20 de agosto de 2025, pretende incorporar en la protección de los entornos alimentarios saludables y el derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Es esencial consolidar marcos normativos que favorezcan el respeto y la garantía plena del derecho humano a la alimentación adecuada

en todas sus dimensiones (disponibilidad, accesibilidad, adecuación y sostenibilidad), con especial atención a los sujetos de protección especial.

El Proyecto de Ley se alinea con los artículos 44 y 65 de la Constitución Política al proponer medidas de salud pública orientadas a la restricción de la publicidad de productos comestibles y bebibles ultraprocesados dirigidos a menores, un factor de riesgo directo para la malnutrición y las enfermedades crónicas.

Las acciones propuestas representan un avance significativo hacia la prevención estructural del daño publicitario, proponiendo limitar su difusión en medios tradicionales, entornos digitales y espacios frecuentados por menores (escuelas, escenarios deportivos). La Defensoría del Pueblo valora positivamente que el proyecto de ley busque trasladar el debate de la alimentación infantil del ámbito individual al estructural, reconociendo el mercado y la publicidad como determinantes sociales de la salud.

Las posibles restricciones contempladas no se consideran una afectación desproporcionada de la libertad de expresión, toda vez que las limitaciones impuestas a empresas y productores persiguen la consecución de objetivos fundamentales de la niñez, cuya importancia justifica plenamente su imposición.

En su conjunto, el proyecto avanza hacia una ética del consumo responsable, alineándose con las tendencias regulatorias regionales -Chile y Argentina- para la protección reforzada de la infancia frente al poder del mercado.

En síntesis, el Proyecto de Ley 194 de 2025 constituye un instrumento clave dentro de la política pública para la garantía del derecho a la alimentación, al proponer medidas integrales orientadas a fortalecer la protección de la niñez, prevenir la malnutrición y consolidar entornos alimentarios saludables. No obstante, la Defensoría del Pueblo identifica la necesidad de fortalecer el proyecto a través de la integración de otros determinantes estructurales, como el acceso a alimentos saludables y la educación nutricional sostenida.

Cabe señalar que, para su implementación, se requiere un compromiso decidido de las entidades competentes. Esto incluye al Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Comisión de Regulación de las Comunicaciones.

La experiencia internacional subraya que el éxito de esta normatividad depende de la coherencia entre el etiquetado, el control publicitario y una inspección, vigilancia y control explícitos y efectivos, requiriendo un compromiso decidido y una coordinación intersectorial de las entidades competentes.

A continuación, se procederá a realizar comentarios puntuales al texto del proyecto de Ley.

7. Comentarios al texto del proyecto

Texto Proyecto de Ley No. 194 de 2025 Senado frente a los cuales se tienen observaciones.	Observaciones Defensoría del Pueblo
Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto la adopción de medidas de salud pública necesarias para proteger los derechos humanos a la	Se sugiere armonizar las disposiciones relacionadas con la protección de los datos de niños niñas y adolescentes de



<p>alimentación y nutrición adecuadas, a la salud, <u>al habeas data</u> así como a la protección contra toda forma de explotación, conforme al interés superior de niñas, niños y adolescentes.</p> <p>Las medidas están dirigidas a restringir la exposición de niñas, niños y adolescentes a la publicidad de productos comestibles y bebidas ultraprocesados, como un factor de riesgo asociado a la epidemia de malnutrición, así como a la aparición de enfermedades no transmisibles.</p>	<p>conformidad con el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 mediante el cual se prohíbe el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública.</p>
<p><b>Artículo 2. Definiciones.</b> Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán la definición que, a continuación, se refiere: (...)</p> <p><b>3. Cuidadores:</b> Toda persona que, de forma gratuita o remunerada, proporcione asistencia o cuidado, temporal o permanente, para la realización de actividades de la vida diaria a niñas, niños y adolescentes, estén o no unidas por vínculos de parentesco.</p> <p><b>4. Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas:</b> Es el derecho de las personas, individual o colectivamente, a no padecer hambre o ninguna forma de malnutrición, a acceder física y económicamente a una alimentación adecuada en todo momento, en términos de calidad y cantidad, y a contar con los bienes y recursos necesarios para asegurarse su propia alimentación. (...)</p>	<p>Se sugiere armonizar la definición de Cuidadores con la definición adoptada mediante el CONPES 4143 de 2025 “Política Nacional de Cuidado.”</p> <p>Es necesario armonizar la definición del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada con la definición consagrada en el artículo 65 de la Constitución Política reformado mediante el Acto Legislativo 01 de 2025.</p>
<p><b>Artículo 4. Mensajes de bien público para incentivar el consumo de alimentos reales.</b> A partir del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social deberán crear y difundir masivamente a través de los medios de radiodifusión sonora, televisión, prensa, cine, afiches, vallas, pancartas, plegables, folletos, entornos digitales y cualquier otro medio de divulgación pública a la población colombiana mensajes de bien público que incentiven y hagan pedagogía sobre la importancia de la producción, suministro y consumo de alimentos reales.</p> <p>Para difundir los mensajes de bien público, el Gobierno Nacional deberá hacer uso de los espacios institucionales en televisión, radio y otros medios de comunicación. Los mensajes de bien público harán especial énfasis en quiénes producen los alimentos reales, los beneficios que estos aportan a la salud, las posibilidades para lograr una alimentación saludable basada en alimentos reales y la importancia de promover ambientes alimentarios saludables. La creación, difusión y uso de estos mensajes deberá observar lo dispuesto en las normas vigentes que regulan los espacios institucionales.</p>	<p>Se sugiere incluir un parágrafo en el que se asigne al Gobierno Nacional la obligación de reglamentar este artículo para definir la forma en que operarán los mensajes de bien público, los criterios de medición y evaluación de impacto.</p>
<p><b>Artículo 7. Contrariedad al interés superior de niñas, niños y adolescentes en el tratamiento de datos personales.</b> Se entenderá, para todos los efectos legales, que el tratamiento de datos personales de niñas, niños y adolescentes con fines</p>	<p>De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 está proscrito el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza</p>

de publicidad de productos comestibles y bebibles ultraprocesados es contrario al interés superior de esta población y no garantiza la protección de sus derechos fundamentales.	pública. En consecuencia, es necesario revisar el sentido de esta disposición.
<p><b>Artículo 8. Restricciones a la publicidad en entornos digitales.</b> Estará prohibida la publicidad de productos comestibles y bebibles ultraprocesados dirigidos, o a la que puedan estar expuestos niñas, niños o adolescentes en los entornos digitales. Esta prohibición incluye la publicidad desarrollada, producida, ofrecida, transmitida, divulgada, intercambiada, o posteada por anunciantes, productores, comercializadores de ultraprocesados, influenciadores, creadores de contenido o cualquier persona que reciba cualquier tipo de contraprestación por divulgar este contenido.</p> <p>Para efectos de lo anterior, estos actores deberán implementar todas las medidas necesarias para evitar que niñas, niños y adolescentes, estén en contacto, expuestos o consuman cualquier tipo de publicidad de productos comestibles y bebibles ultraprocesados. Estas medidas comprenderán como mínimo la adopción de mecanismos efectivos de verificación de la edad y/o aseguramiento de edad, ajustes y configuraciones predeterminadas para restringir la publicidad dirigida o a la que puedan resultar expuestos niñas, niños y adolescentes, y herramientas técnicas que permitan identificar, limitar y reportar contenidos publicitarios de productos comestibles y bebibles ultraprocesados.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reglamentará lo relacionado en los artículos 7 y 8 de la presente Ley, en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las entidades competentes en la materia.</p>	Es fundamental incluir expresamente la corresponsabilidad en el respeto y garantía de los derechos humanos por parte de los diferentes actores que intervienen en la publicidad en los entornos digitales (anunciante, agencia, plataforma, creador).
<b>Artículo 11. Vigencia.</b> La presente ley rige <u>dentro del año siguiente</u> a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.	La redacción es imprecisa y da a entender que la vigencia de la ley es limitada.

8. Comentario final
- La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso constitucional y legal de contribuir al fortalecimiento del marco normativo en materia del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, aportando un enfoque técnico y especializado que garantice la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y, en consecuencia,

DEFIENDE

el Proyecto de Ley No. 194 de 2025, el cual no solo es una regulación técnica, sino que promueve una transformación ética y social en torno a la alimentación, entendiéndola como un derecho y no como un mero producto de consumo. Su articulación de salud pública, derechos humanos y regulación de mercado, con énfasis en los entornos digitales, reafirma el deber estatal de garantizar condiciones estructurales para una vida saludable y digna.

Calle 55 # 10-32 · Sede Nacional · Bogotá, D.C. PBX: (57) (601) 3144000 • Línea Nacional: 01 8000 914814

www.defensoria.gov.co

La aprobación de esta ley es crucial, pues exige al Estado fortalecer la vigilancia intersectorial, impulsa a la industria alimentaria a una corresponsabilidad social mediante la transformación de sus estrategias de mercadeo y, fundamentalmente, consolida una sociedad que protege a la niñez de la exposición a mensajes que fomentan el consumo de productos nocivos.

En virtud de la progresividad del derecho a la alimentación, la Defensoría resalta la importancia de aprobar una ley que establezca restricciones efectivas a la publicidad de ultraprocesados para prevenir la malnutrición y garantizar la prevalencia del interés superior de la niñez.

Finalmente, se insta al Honorable Senado a considerar la acumulación del Proyecto de Ley 194 de 2025 (Senado) con el Proyecto de Ley 245 de 2025 (Cámara). Dicha acción aseguraría la coherencia normativa, la eficiencia legislativa y la consolidación de un marco integral de protección.

Para la Defensoría del Pueblo, el Proyecto de Ley 194 de 2025 se ajusta plenamente a la Constitución Política y representa un paso decisivo hacia la protección de la salud, la dignidad y el bienestar integral de la niñez y la adolescencia colombiana.

Cordialmente,



**IRIS MARIN ORTIZ**  
**DEFENSORA DEL PUEBLO**

**DESPACHO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO**

Aprobado el: 12/diciembre/2025 09:33:52 a. m.

Hash: CEE-85e4d8634557f9b23577154d54cd50a1ffc5265a

**Anexo:**

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente
Proyectó y elaboró	Sofia Elisa Sierra Arteaga	sosierra [10/diciembre/2025 11:20:38 a. m.]
Revisó	Sergio Andres Coronado Delgado	scoronado [11/diciembre/2025 03:22:02 p. m.]
Revisó	Omar Francisco Sanchez Vivas	omsanchez [12/diciembre/2025 09:27:44 a. m.]
Aprobó	Iris Marin Ortiz	irmarin [12/diciembre/2025 09:33:52 a. m.]

Quienes tramitamos, proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

*Señor ciudadano, para la Dfensoría del Pueblo es  
Muy importante conocer su percepción frente a los  
Servicios prestados.*

*Evaluar los servicios que presta la Defensoría del  
Pueblo es muy fácil, eccediendo a nuestra "Encuesta  
De Satisfacción al Usuario"escaneando el siguiente  
Código QR.*

